



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Disposición Aprobación del protocolo para la entrega de bases de microdatos

VISTO el Expediente EX-2026-37581437- -APN-SSIYEE#MCH, las Leyes N° 26.206 de Educación Nacional, N° 17.622 de Estadística y Censos, N° 25.326 de Protección de Datos Personales, N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO

Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobaron la conformación organizativa del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, y las acciones a cargo de la SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 define a la educación y al conocimiento como un bien público a la vez que un derecho personal y social, y establece que la educación es una prioridad nacional.

Que, asimismo, la mencionada ley regula lo concerniente a la información y a la evaluación del sistema educativo, en tanto instrumentos para la toma de decisiones tendientes a la mejora constante de la calidad educativa, como lo establecen los artículos 1°, 4°, 7°, 11° inciso “a”, 85° inciso “d”, y en especial los artículos 94 a 99 que conforman el Capítulo III de la Ley N° 26.206.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la Ley N° 26.206, son objeto de información y evaluación las principales variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación.

Que, en referencia a la publicidad de la información, el artículo 97 de la precitada ley establece que “el entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de

estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

Que la comprensión del modo en que se aplican las leyes vigentes para establecer las acciones debidas en punto a la difusión de la información de los resultados evaluativos ha sido objeto de muy diversas interpretaciones que han llevado a conclusiones divergentes en cuanto a la existencia o inexistencia de colisión de normas y, con ello, a la supuesta colisión de derechos individuales y funciones públicas, repercutiendo negativamente en la toma de decisiones y en la gestión específica de la difusión de la información de los resultados de las evaluaciones del sistema educativo.

Que en la actualidad el acceso a la información de la evaluación educativa se encuentra disponible en distintas bases de datos y por vía de diversas plataformas y soportes, administrados por la SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que para acceder a ellos, se ha establecido un sistema de acuerdo a criterios de grados de acceso y sus respectivas necesidades y a la exigencia legal de protección de datos en cada caso, a saber: el Sistema Integrado de Consulta de Datos e Indicadores Educativos (SICDIE); el SICDIE de Uso Interno; el Anuario Estadístico Educativo; los Microdatos - Bases Usuarias de Estadística; Microdatos e informes de las Evaluaciones Aprender; el Padrón de Establecimientos Educativos; los Indicadores; el Mapa educativo; Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE); los Informes de investigación; el Glosario; los Cuadernillos de relevamiento; Gestión de la información.

Que, por otra parte, la Ley N° 17.622 regula las actividades estadísticas oficiales y la realización de censos que se efectúen en el territorio de la Nación.

Que el artículo cuarto de la citada ley, incluye en el ámbito del Sistema Estadístico Nacional a los servicios estadísticos de los Ministerios y Secretarías de Estado, y establece que las informaciones que se suministren a dichos organismos, en cumplimiento de la ley, serán estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos, al mismo tiempo que los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente, en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran.

Que, por su parte, la Ley N° 25.326 regula la protección de datos personales, y establece los derechos de los titulares de dichos datos, así como las obligaciones de quienes administran bases de datos personales de terceros.

Que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Que la última norma citada reconoce como principios los de transparencia y máxima divulgación, y el de máximo acceso, siempre respetando las normativas especiales en materia de protección de datos y difusión de la información.

Que, lo establecido en el artículo 97 de la Ley N° 26.206 supone un tratamiento especial de la información educativa, a la luz de los principios y finalidades propias que la Ley expresamente manda a cumplir, por lo que la aplicación de las demás normas de tratamiento y difusión de la información debe realizarse teniendo en cuenta la naturaleza de los datos y los fines de la Ley especial.

Que la recopilación, el relevamiento, la guarda y la disponibilidad de la información para la evaluación del

sistema educativo, en todos sus métodos y acciones, reconoce fines específicos que son los propios que la Ley N° 26.206 establece como ley especial de la materia y que, a los efectos de la gestión pública de tales recursos para alcanzar aquellos fines, permite distinguir rangos de prioridad en la aplicación de las leyes que regulan el tratamiento de la información, por lo que es necesario que las autoridades en la materia decidan la aplicación pertinente y razonable, explicando los motivos al momento de decidir la resolución de reglas que, frente a ciertos casos, podrían interpretarse como en posible colisión.

Que las Leyes especiales de educación dictadas por cada una de las jurisdicciones federales regulan la materia educativa y en especial, lo concerniente a la calidad y equidad de la educación como así también al manejo de la información evaluativa y que, para tales materias, dichas normas jurisdiccionales regulan contenidos acorde con los de la Ley Nacional N° 26.206.

Que las prioridades específicas de la Ley N° 26.206, así como la aplicación de otras leyes de orden nacional como las Leyes N° 17.622 de estadísticas y censos, N° 25.326 de datos personales y N° 27.275 de acceso a la información pública hace recomendable que la SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, pueda distinguir rangos de acceso a la información de conformidad con los distintos fines que puedan ser identificados a los efectos de establecer categorías de usuarios o, en definitiva, adoptar las medidas y métodos que sean más apropiados en el marco de la legislación vigente en cada momento.

Que, en función del marco normativo expuesto, resulta necesario establecer instrumentos técnicos y procedimentales claros que permitan ordenar, sistematizar y fundamentar las decisiones vinculadas al acceso y la entrega de bases de microdatos educativos.

Que la creciente demanda de información detallada por parte de organismos públicos, instituciones académicas, equipos de investigación y otros actores legítimos, torna imprescindible contar con mecanismos claros de acceso a la información, y contar con criterios objetivos, homogéneos y verificables que permitan evaluar la factibilidad de atender pedidos específicos para entregar microdatos, observando en esa tarea los fines públicos de la información, la protección de los datos personales y el resguardo del secreto estadístico.

Que la ausencia de un protocolo específico que establezca procedimientos, requisitos, responsabilidades y criterios técnicos de análisis para la entrega de microdatos educativos puede derivar en decisiones discrecionales, interpretaciones dispares o riesgos innecesarios en materia de confidencialidad, afectando tanto la seguridad de la información como la confianza en los sistemas de evaluación e información educativa.

Que, en particular, resulta necesario definir criterios técnicos vinculados, entre otros aspectos, al nivel de desagregación de los datos solicitados, los mecanismos de anonimización y disociación, la finalidad que sea declarada para el uso de la información, el perfil institucional del solicitante, las condiciones de resguardo y uso de los datos, y los eventuales riesgos de reidentificación de personas o establecimientos educativos.

Que la instrumentación de un protocolo específico para el acceso a microdatos educativos brinda un adecuado equilibrio entre el principio de transparencia, el acceso a la información pública, las obligaciones legales de confidencialidad, la protección de datos personales frente a las restricciones legales estadísticas, todo ello en el marco de la Ley N° 26.206 y de las demás normas aplicables.

Que, asimismo, la adopción de reglas claras y procedimientos estandarizados fortalece la seguridad jurídica, robustece los derechos individuales de quienes tengan prerrogativas para su uso, fortalece la trazabilidad de las decisiones administrativas y la rendición de cuentas, al tiempo que facilita la gestión y el control interno de los

procesos de entrega de información sensible.

Que, en tal sentido, corresponde aprobar un protocolo que establezca las condiciones, modalidades y criterios técnicos bajo los cuales podrá autorizarse el acceso a microdatos educativos, así como un modelo de acuerdo de confidencialidad que asegure el uso responsable y limitado de la información suministrada.

Que la AUDITORÍA SECTORIAL DE EDUCACIÓN ha tomado la intervención de su competencia conforme lo previsto en el artículo 101 del Decreto N° 1344/2007.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

DISPONE:

Artículo 1° — Aprobar el protocolo para el acceso a microdatos educativos, que como ANEXO I (IF-2026-42085304-APN-SSIYEE#MCH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 2° — Aprobar los modelos de nota y de formulario a ser utilizados en los casos en que corresponda hacer entrega de las bases de microdatos educativos, que como ANEXO II (IF-2026-42085151-APN-SSIYEE#MCH) forman parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 3° — Aprobar el modelo de acuerdo de confidencialidad a ser utilizado en los casos en que corresponda hacer entrega de las bases de microdatos educativos, que como ANEXO III (IF-2026-42084999-APN-SSIYEE#MCH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 4° — Comuníquese y archívese.